

Apariciones en video en el proceso de deportación ante el tribunal de inmigración

Procedimientos: Un análisis jurídico

Generado por: Asistente Legal de
IA. Facilitado por: Bufete de Abogados de Fernando Hidalgo, Inc.

2 de febrero de 2026

© 2026 Bufete de Abogados de Fernando Hidalgo, Inc. Generado por un Asistente Legal de IA. Con la colaboración del Bufete de Abogados de Fernando Hidalgo, Inc. Todos los derechos reservados.

COMPARECENCIAS EN VIDEO EN EL TRIBUNAL DE INMIGRACIÓN PARA LA EXPULSIÓN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES: UN ANÁLISIS JURÍDICO EXHAUSTIVO

Este informe examina el marco procesal, regulatorio y constitucional que rige las comparecencias por videoconferencia y telefónicas en los procedimientos de deportación ante los tribunales de inmigración. El análisis revela un complejo panorama legal en el que los jueces de inmigración poseen una amplia discreción para celebrar audiencias por video o teléfono conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad; sin embargo, esta discreción se ve cada vez más limitada por consideraciones de debido proceso, requisitos de consentimiento legal y recientes cambios en las políticas. La evidencia empírica demuestra que los detenidos que comparecen virtualmente enfrentan tasas de deportación significativamente más altas que aquellos que comparecen en persona en situaciones similares, lo que plantea importantes preocupaciones sobre la equidad y el acceso a la justicia. Los profesionales del norte de California deben considerar aspectos específicos de la jurisdicción, sin perder de vista los avances más amplios en la legislación del circuito que afectan directamente los resultados de sus clientes. Este informe sintetiza la autoridad legal, las directrices de las agencias, los precedentes de los tribunales federales y la práctica en el Distrito Norte de California para proporcionar una base para la toma de decisiones estratégicas con respecto a la modalidad de comparecencia en los procedimientos de deportación.

Marco legal y reglamentario que autoriza las audiencias remotas

La autoridad legal fundamental para las audiencias por video y teléfono en los procedimientos de inmigración proviene de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, enmendada por la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA) de 1996. Conforme al [8 USC § 1229a(b)(2)(A) y (B)]^[32], los jueces de inmigración poseen autorización explícita para llevar a cabo procedimientos de deportación por videoconferencia y pueden realizar audiencias por teléfono sujetas a restricciones de consentimiento específicas. La ley distingue entre diferentes tipos de audiencias, reconociendo que la modalidad de adjudicación conlleva distintas implicaciones procesales según si la audiencia constituye una audiencia probatoria sobre el fondo del asunto o una cuestión procesal preliminar.^[1]^[32]

La implementación reglamentaria de esta autoridad legal aparece en [8 CFR § 1003.25(c)]^[21], que establece que un juez de inmigración puede realizar audiencias por videoconferencia en la misma medida que las audiencias presenciales. Este lenguaje reglamentario otorga a los jueces de inmigración una discreción excepcionalmente amplia, permitiendo explícitamente los procedimientos por video para prácticamente cualquier tipo de audiencia.^[21]^[37] Sin embargo, la misma regulación impone una limitación crítica específica para los procedimientos telefónicos: una audiencia probatoria sobre el fondo solo puede realizarse por teleconferencia con el consentimiento informado del demandado después de que se le haya informado de su derecho a proceder en persona o por videoconferencia.^[21]^[32]^[37] Este requisito de consentimiento no se aplica a las videoconferencias, solo a las llamadas telefónicas, lo que crea una distinción significativa en el marco regulatorio que tiene importantes implicaciones estratégicas para los demandados que buscan preservar sus derechos procesales.^[1]

El Manual de Práctica de los Tribunales de Inmigración (ICPM), la guía procesal autorizada emitida por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), codifica estos principios y proporciona detalles procesales adicionales. El Capítulo 4.7 del ICPM confirma que los jueces de inmigración están autorizados a celebrar audiencias por videoconferencia o teleconferencia conforme a la INA § 240(b)(2) y 8 CFR § 1003.25(c), con la misma excepción aplicable a las audiencias probatorias sobre el fondo realizadas por teléfono.^[1]^[35] El ICPM especifica que las audiencias celebradas por videoconferencia o teleconferencia se rigen por las mismas reglas que las audiencias presenciales, una declaración que parece sencilla pero que contiene implicaciones significativas con respecto a la determinación de la credibilidad, la presentación de pruebas y las garantías procesales que se analizarán en secciones posteriores de este análisis.

examinar en detalle.[1]

Una nota procesal importante relevante para la presentación y el mantenimiento de registros: para las audiencias realizadas por videoconferencia o conferencia telefónica, los documentos deben presentarse en el tribunal de inmigración que tenga el control administrativo sobre el registro de los procedimientos, que puede diferir de la ubicación física desde la que participan las partes.[1][35][49] Esta distinción ha cobrado mayor importancia a medida que la EOIR ha ampliado el uso de plataformas basadas en internet, como Cisco Webex, que permiten a las partes comparecer desde lugares fuera de los juzgados tradicionales. El ICPM señala que los jueces de inmigración suelen permitir el envío de documentos por fax entre las partes y el juez durante las audiencias por video o teléfono, una práctica que responde a las dificultades prácticas de presentar pruebas físicas a distancia, pero que también crea posibles obstáculos para los demandados que se representan a sí mismos y que no tienen fácil acceso a máquinas de fax, o para los profesionales que gestionan litigios complejos a distancia.[1][35]

Evolución de la política de la EOIR: desde el PM 21-03 hasta el PM 25-25

Para comprender el estado actual de la política de audiencias por video en los tribunales de inmigración, es necesario prestar especial atención a la evolución de las directrices de la EOIR durante los últimos cinco años, un período marcado por importantes cambios de política que reflejan prioridades administrativas contrapuestas. El documento normativo fundamental que rige las audiencias por videoconferencia es el [Memorando de Política 21-03 de la EOIR][6][38], emitido el 6 de noviembre de 2020, tras la expansión forzada de las capacidades de audiencia remota debido a la pandemia de COVID-19. Este memorando, titulado "Audiencias de los Tribunales de Inmigración realizadas por teléfono y videoconferencia", establece explícitamente que "la política de la EOIR sigue siendo que la videoconferencia puede utilizarse para cualquier audiencia de los tribunales de inmigración, especialmente cuando la necesidad operativa lo requiera".[2][6][38] El memorando identifica múltiples justificaciones para el uso de la videoconferencia, entre ellas, brindar comodidad y accesibilidad a los demandados, reducir los costos de viaje, consolidar y gestionar los expedientes de manera eficiente, garantizar la adjudicación oportuna de los casos y llegar a lugares donde no hay un tribunal de inmigración permanente.[6][38]

Es fundamental que el PM 21-03 enfatice que los jueces de inmigración "ejercen su juicio y discreción independientes" sobre si realizar procedimientos por video o teléfono, sujeto a la ley aplicable y los requisitos del ICPM.[6][38] El memorando señala que los jueces de inmigración pueden emitir órdenes permanentes y los tribunales de inmigración pueden adoptar procedimientos operativos locales que aborden las comparecencias telefónicas o por videoconferencia sin requerir mociones individuales en cada caso.[6][38] La política reconoce que cualquiera de las partes puede presentar una moción solicitando comparecencias telefónicas o por videoconferencia para las partes o los testigos, y los jueces de inmigración conservan la autoridad discrecional para conceder o denegar dichas mociones en función de las circunstancias específicas del caso.[6] Sin embargo, el memorando no contiene ninguna instrucción afirmativa sobre cómo los jueces deben ejercer esta discreción o qué factores deben guiar sus decisiones, dejando un amplio espacio interpretativo para que las preferencias individuales de los jueces den forma al marco de modalidad en la práctica.

En agosto de 2022, el director de la EOIR, David L. Neal, emitió el Memorando del Director 22-07, titulado "Audiencias basadas en Internet", que representó un desarrollo normativo significativo con respecto a los derechos de los demandados en los procedimientos virtuales.[34][53] Este memorándum proporcionó directrices específicas para las audiencias de video basadas en Internet utilizando plataformas como Webex, distinguiendo dichas audiencias de los sistemas VTC internos cerrados utilizados históricamente por la EOIR.[34][53] La guía establecía que, si bien la decisión de si un juez de inmigración comparece en el tribunal o de forma remota recae en el tribunal en función de la política de la agencia y las necesidades operativas, "un juez de inmigración debe atender la solicitud de un demandado de comparecer en el tribunal o de forma remota cuando sea apropiado y factible".[34][53] Para los demandados representados, el memorando instruía que los jueces de inmigración "deberían, en general, conceder las solicitudes para que el demandado, el abogado o ambos comparezcan en el tribunal o de forma remota".[34][53] Para los demandados no representados, el memorando establecía que "el tribunal no ordenará a un demandado no representado que comparezca de forma remota", pero que dichos demandados "pueden solicitar hacerlo, y un

El juez de inmigración generalmente debería conceder dicha solicitud.”[34][53]

El DM 22-07 dispuso además que las solicitudes de comparecencia remota o presencial deben hacerse por escrito quince días antes de la audiencia, a menos que el juez de inmigración las exima, un requisito procesal que crea obligaciones de planificación para los abogados y potencialmente perjudica a los demandados que se representan a sí mismos y que carecen de conocimiento de los procedimientos judiciales.[34][53] El memorando también abordó las comparecencias de testigos, exigiendo que los jueces de inmigración atiendan las solicitudes de testigos para comparecer de forma remota cuando dichas solicitudes sean razonables, reconociendo así que el testimonio remoto puede mejorar el acceso a la evidencia y reducir las cargas para los testigos y las partes.[34][53]

La estabilidad de este marco normativo resultó efímera. El 14 de marzo de 2025, el director interino de la EOIR, Sirce Owen, emitió el Memorando de Política 25-25, que revocaba y cancelaba por completo el DM 22-07.[20][57] El PM 25-25 afirma que el DM 22-07 era "inútil" y excedía la autoridad del director porque "ordenaba" a los jueces decidir las mociones relacionadas con las audiencias por video de una manera particular, lo que supuestamente limitaba la discreción judicial.[20][57] El memorándum argumenta además que el DM 22-07 "contradecía" el PM 21-03 de la era Trump, alegando que el PM 21-03 establecía que los jueces de inmigración poseen discreción independiente, libre de directrices directivas sobre cómo ejercerla.[20][57] Al revocar la DM 22-07, la EOIR ha vuelto al marco más permisivo de la PM 21-03, que no contiene ningún requisito afirmativo de que los jueces accedan a las solicitudes de los demandados para comparecencias en persona o remotas.[20][57]

Este cambio de política tiene consecuencias directas e inmediatas para los demandados que buscan influir en la modalidad de su audiencia. Mientras que la DM 22-07 había creado una presunción a favor de la adaptación a las preferencias de los demandados representados y una prohibición de ordenar a los demandados no representados que comparecieran de forma remota, el marco normativo actual bajo la PM 21-03 (como lo aclara la PM 25-25) no contiene tales presunciones ni prohibiciones.[20][38][57] Los jueces de inmigración ahora poseen lo que parece ser una discreción ilimitada para determinar la modalidad de la audiencia en función de las necesidades operativas y las preferencias individuales del juez, sujeto únicamente al requisito de consentimiento legal para las audiencias telefónicas sobre el fondo del asunto.[20][38]

Protecciones del debido proceso y evidencia empírica de disparidades en los resultados

El marco del debido proceso que rige las audiencias por video en los procedimientos de los tribunales de inmigración refleja la tensión entre la autorización legal para la adjudicación remota y las preocupaciones constitucionales con respecto a los procedimientos justos en casos con graves consecuencias. Si bien las audiencias por video están explícitamente autorizadas por ley, los tribunales federales han reconocido que, en circunstancias particulares, la videoconferencia puede violar los derechos al debido proceso o el derecho a una audiencia justa.[17] El Noveno Circuito, cuyo precedente rige los procedimientos del norte de California, ha articulado el estándar en [Shin v. Mukasey, 547 F.3d 1019, 1024 (9th Cir. 2008)][17], estableciendo que para impugnar con éxito una orden de expulsión por motivos de debido proceso, "debe demostrarse que los procedimientos fueron manifiestamente injustos y que las acciones del [juez de inmigración] fueron tales que impidieron una audiencia justa".[17]

El Noveno Circuito ha reconocido además que las violaciones del debido proceso procesal y las reclamaciones por asistencia letrada ineficaz "se basan en el derecho a una audiencia completa y justa" y "no se ven afectadas por la naturaleza del recurso solicitado", creando un requisito de equidad básica que se aplica independientemente de si el recurso solicitado es discrecional (como la cancelación de la remoción) o se basa en derechos legales más rigurosos.[17] Este principio tiene particular relevancia para las audiencias por video, ya que el formato puede menoscabar la equidad de los procedimientos a través de múltiples mecanismos que las secciones posteriores de este análisis examinan en detalle.

La evidencia empírica sobre los resultados de las pruebas de audición por video es sorprendente y consistente en múltiples estudios. El estudio histórico de la profesora Ingrid V. Eagly, publicado en la revista *Northwestern University Law Review* y

Un informe sobre el primer estudio empírico de la tecnología de videoconferencia en los tribunales de inmigración revela lo que Eagly denomina una "paradoja de resultados". [8][27][30] Su estudio, que compara los resultados de los casos de videoconferencia y presenciales en los tribunales federales de inmigración, demuestra que los litigantes detenidos por videoconferencia tenían una probabilidad significativamente mayor de ser deportados que los litigantes detenidos presenciales; sin embargo, los jueces no denegaron las demandas de los encuestados en los casos de videoconferencia con mayor frecuencia. [8][27][30]

Los hallazgos estadísticos son sustanciales y persisten incluso después de controlar numerosas variables. En comparación con los encuestados presenciales detenidos en situaciones similares, los encuestados por videoconferencia detenidos tenían un 90 % más de probabilidades de solicitar alivio, un 35 % más de probabilidades de obtener asesoría legal y un 6 % más de probabilidades de solicitar únicamente la salida voluntaria. [8][27][30] Estos resultados fueron estadísticamente significativos incluso al controlar otros factores que podrían influir en los resultados de los casos, como el juez asignado al caso, la representación legal, el tipo de cargo de la fiscalía, la nacionalidad y el año fiscal de la decisión. [8][27][30]

Eagly explica que los resultados inferiores para los litigantes por videoconferencia no se deben a que los jueces juzguen las reclamaciones de deportación con mayor severidad a través de una pantalla de video, sino más bien a una "menor participación en el proceso adversarial" entre los litigantes separados del entorno tradicional de la sala del tribunal. [8][27][30] Es importante destacar que, entre las personas que solicitaron diversas formas de alivio, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en el resultado después de controlar otros factores, lo que indica que las audiencias por video no parecen afectar la toma de decisiones judiciales sobre el fondo una vez que se inicia el litigio. [8][27][30] Sin embargo, debido a que los participantes por video tenían una probabilidad sustancialmente menor de solicitar alivio o contratar un abogado, en general los casos por video tenían una probabilidad significativamente mayor de terminar en deportación. [8][27][30]

Eagly identifica varios mecanismos a través de los cuales los procedimientos por video conducen a una menor participación de los demandados. Primero, los demandados pueden percibir los procedimientos por videoconferencia como injustos o ilegítimos, lo que influye en su disposición a participar plenamente en el proceso contradictorio. [8][27][30] Segundo, los desafíos técnicos inherentes a los litigios por video, incluidas las dificultades para presentar pruebas, gestionar documentos e interrogar a los testigos, crean barreras prácticas para una defensa eficaz. [8][27][30] Tercero, los litigantes remotos experimentan interacciones de menor calidad con los actores de la sala del tribunal (jueces, fiscales, intérpretes y otros participantes) debido a la separación espacial que crea el video. [8][27][30] Cuarto, la exclusión de una audiencia pública de las salas de audiencias remotas elimina una dinámica social que puede alentar la participación de los demandados y brindar apoyo emocional o motivacional. [8][27][30]

Más allá del trabajo fundamental de Eagly, la evidencia empírica del Centro Brennan para la Justicia documenta aún más las disparidades en los procedimientos por videoconferencia en diversos contextos. Un estudio sobre audiencias de fianza penal reveló que a los acusados cuyas audiencias se llevaron a cabo por videoconferencia se les impusieron fianzas sustancialmente más altas que a sus contrapartes presenciales, con incrementos que oscilaron entre el 54 % y el 90 %, según el delito. [8][11] Esta investigación sugiere que la modalidad de video puede perjudicar sistemáticamente a los encuestados en múltiples contextos de adjudicación, no solo en los tribunales de inmigración. La investigación del Centro Brennan también identifica un estudio sobre tribunales de inmigración que revela que las personas detenidas tenían más probabilidades de ser deportadas cuando sus audiencias se realizaban por videoconferencia en lugar de presencialmente, lo que coincide con los hallazgos de Eagly. [8][11]

Varios estudios sobre el testimonio remoto de niños encontraron que los niños eran percibidos como menos precisos, creíbles, consistentes y seguros cuando aparecían por video. [8][11] En tres de los seis tribunales de inmigración encuestados, los jueces identificaron casos en los que habían cambiado las evaluaciones de credibilidad realizadas durante una audiencia por video después de celebrar una audiencia en persona, lo que sugiere que los propios jueces reconocen la posible distorsión de las determinaciones de credibilidad en el contexto del video. [8][11]

El informe encargado por la EOIR en abril de 2017, realizado por Booz Allen Hamilton, concluyó que la virtual

Los procedimientos deben limitarse a cuestiones procesales debido a preocupaciones sobre el debido proceso.[15][18][45]

Este análisis patrocinado por la agencia contradujo directamente la política oficial posterior de la EOIR que promovía un uso ampliado de VTC, sin embargo, la preocupación subyacente sobre la interferencia del debido proceso nunca se ha abordado formalmente a través de una revisión regulatoria o una anulación explícita de la política.

Marco procesal para solicitar formatos de audiencia modificados

Los mecanismos procesales para solicitar audiencias por videoconferencia o presenciales varían según si el demandado está representado por un abogado y si la solicitud busca pasar de una audiencia presencial programada a una audiencia remota, o viceversa. El marco actual, tras la derogación de la DM 22-07 por la PM 25-25, otorga a los jueces de inmigración discreción para aceptar o rechazar dichas solicitudes según las circunstancias del caso, sin que exista una presunción afirmativa que favorezca las preferencias del demandado.

Solicitud de cambio de formato de audiencia: Procedimientos para personas que se representan a sí mismas

Para los demandados no representados que buscan cambiar el formato de su audiencia, el Proyecto Nacional de Inmigración ha publicado una guía completa diseñada específicamente para litigantes que se representan a sí mismos.[2][9][54] Esta guía, actualizada en 2025, instruye a los demandados a preparar una Moción para Cambiar el Formato de la Audiencia que debe incluir tanto la moción en sí como la evidencia de respaldo que explique las razones del cambio solicitado.[2][9][54]

La moción debe explicar claramente por qué el demandado quiere cambiar el formato de la audiencia a una audiencia en línea, citando potencialmente razones tales como condiciones médicas que impiden la asistencia presencial, barreras de transporte, obligaciones laborales o familiares u otros factores de dificultad.[2][9][54] La evidencia de respaldo podría incluir documentación médica, cartas de proveedores de atención médica que expliquen limitaciones médicas, evidencia de discapacidad, dificultades de transporte o restricciones financieras que hacen que la asistencia al juzgado sea impracticable.[2][9][54] La guía instruye explícitamente a los demandados que se representan a sí mismos a no asumir que presentar una moción resultará en el cambio de formato solicitado, y recomienda encarecidamente mantener un plan de respaldo para asistir a la audiencia en persona a menos que y hasta que la moción sea aprobada y se reciba una orden judicial.[2][9][54]

En cuanto al procedimiento, la moción debe enviarse por correo tanto al tribunal de inmigración donde el caso está pendiente como al abogado del gobierno (Oficina del Asesor Jurídico Principal, Departamento de Seguridad Nacional).[2][9][54] La moción debe presentarse lo antes posible para darle al tribunal tiempo suficiente para decidir antes de la próxima audiencia programada.[2][9][54] Los demandados que se representan a sí mismos pueden acceder a la información de su caso y confirmar los detalles de la audiencia a través del Sistema Automatizado de Información de Casos (ACIS) en <https://acis.eoir.justice.gov/> o llamando a la línea directa del tribunal de inmigración al 1-800-898-7180.[2][9][19][54]

La plantilla proporcionada en la guía para personas que se representan a sí mismas requiere que los demandados incluyan su nombre, el número A (el identificador único del caso que comienza con la letra "A" seguida de ocho o nueve dígitos), el nombre del juez de inmigración asignado y la fecha y hora de la próxima audiencia.[2][9][54] La moción debe explicar en detalle por qué el demandado solicita el cambio de formato, prestando especial atención a por qué proceder de forma remota (si se solicita virtual) o en persona (si se solicita cambiar de virtual programado) sería "apropiado y factible para todas las partes".[2][9][54]

Representó a los demandados y presentó mociones iniciadas por sus abogados.

Para los demandados representados por un abogado, los procedimientos de moción siguen los requisitos del Manual de Práctica del Tribunal de Inmigración para mociones generales, aplicando consideraciones específicas para las videoconferencias. Según el [Capítulo 5.10 del ICPM][12][51], las mociones para permitir comparecencias telefónicas o por video deben presentarse con una página de portada debidamente etiquetada (ya sea "MOCIÓN PARA PERMITIR COMPARECENCIA TELEFÓNICA" o una moción para cambiar el formato de la audiencia a una basada en internet), y deben cumplir con los plazos y requisitos de presentación generalmente aplicables.

mociones.[12][31][51]

Para las audiencias del calendario principal específicamente, el Capítulo 4.15 del ICPM proporciona procedimientos detallados para comparecencias telefónicas.[31] La moción debe indicar la fecha y hora de la audiencia del calendario principal y explicar el/los motivo(s) para solicitar una comparecencia telefónica o por video.[31] Si se solicita una comparecencia telefónica, la moción debe indicar el número de teléfono del demandado o del abogado que comparecerá.[31] Es fundamental que la mera presentación de una moción para permitir una comparecencia telefónica o por video no exima al demandado de comparecer en persona en la audiencia programada; el demandado debe comparecer en persona a menos que el juez de inmigración conceda la moción.[31]

La guía actual del ICPM, bajo el marco posterior a la PM 25-25, no establece un plazo para la presentación de dichas mociones, ni exige que los jueces concedan o siquiera consideren las preferencias de los demandados, ni tampoco incluye una declaración de fundamentos que guíe la discreción judicial respecto a si se deben aceptar o no las solicitudes de cambio de formato. Esto representa un cambio significativo con respecto al marco anterior a marzo de 2025, bajo la DM 22-07, que especificaba un requisito de notificación previa de quince días y establecía presunciones a favor de la aceptación de las solicitudes de los demandados representados, así como prohibiciones para obligar a los demandados no representados a comparecer de forma remota.

Estándares para la presentación de mociones y discreción judicial

El estándar actual para la consideración por parte de los jueces de las mociones de comparecencia por video/telefónica sigue siendo en gran medida discrecional y específico de cada juez. El ICPM establece que las mociones deben explicar los motivos de la solicitud y, cuando corresponda, estar respaldadas por pruebas, pero no especifica qué factores deben sopesar los jueces ni qué tipos de pruebas deben considerarse convincentes.[31] [51] Los jueces de inmigración pueden considerar factores tales como la distancia del viaje, el costo del viaje, las condiciones médicas, la disponibilidad de testigos, la complejidad del caso, si la presentación de pruebas requiere testimonio en persona y consideraciones operativas que afectan los calendarios judiciales y recursos.

Detenidos frente a no detenidos: Distinciones procesales y prácticas Consideraciones

Las implicaciones legales y prácticas de las audiencias por video difieren sustancialmente según si el demandado se encuentra bajo custodia del DHS. Para los demandados detenidos en centros de detención de inmigrantes, la modalidad principal ha sido históricamente la comparecencia presencial ante el tribunal mediante sistemas internos cerrados de videoconferencia, donde los demandados comparecen desde el centro de detención mientras que los jueces y los abogados del DHS comparecen desde salas de audiencias en diferentes lugares.[7][15][33]

Sin embargo, la investigación empírica demuestra que los detenidos que comparecen por videoconferencia se encuentran en desventaja sustancial en múltiples aspectos. El estudio de Northwestern halló que los detenidos que comparecían por videoconferencia tenían un noventa por ciento más de probabilidades de solicitar amparo que los detenidos que comparecían en persona, una enorme disparidad que persiste incluso después de controlar numerosas variables.[8][27][30] Este hallazgo indica que la modalidad de video en sí misma, independientemente de las características del juez, los hechos del caso u otras variables, reduce considerablemente la participación de los detenidos en el proceso legal.

Para los detenidos, los desafíos prácticos de la representación por video se ven agravados por barreras institucionales. El informe de la ACLU, "Sin ninguna posibilidad de luchar", documenta impedimentos sistemáticos para la comunicación efectiva entre abogado y cliente en los centros de detención de inmigrantes, incluyendo acceso telefónico inadecuado, imposibilidad de programar llamadas telefónicas con los clientes detenidos, falta de espacios confidenciales para reuniones presenciales y restricciones para que los abogados lleven la tecnología necesaria (computadoras, teléfonos celulares) a las visitas legales.[52]

En aproximadamente el ochenta y cinco por ciento de los centros de detención, los inmigrantes detenidos no pueden realizar viajes gratuitos al extranjero.

llamadas telefónicas a los abogados.[52] En muchos centros, los abogados ni siquiera pueden programar llamadas telefónicas con los clientes detenidos en horarios mutuamente convenientes, lo que impide tanto las comunicaciones rutinarias como las urgentes necesarias para la representación.[52]

Estas barreras en los centros de detención afectan directamente la imparcialidad de las audiencias por videoconferencia. Cuando un detenido debe comparecer por videoconferencia desde el centro donde la comunicación con su abogado está severamente restringida, su capacidad para participar de manera efectiva en el proceso judicial se ve sustancialmente comprometida.

Es posible que el abogado defensor haya tenido limitaciones para preparar adecuadamente al acusado para su testimonio en la audiencia, explicarle conceptos legales o requisitos procesales, o abordar sus inquietudes antes de la misma. El acusado, sentado frente a una pantalla de video en un centro de detención, podría no tener acceso a documentos, haber tenido oportunidades limitadas para revisar pruebas o argumentos legales, y percibir la audiencia como un evento aislado y desempoderador, en lugar de una oportunidad para presentar su testimonio completo y participar de manera significativa en el proceso legal.

Para los acusados no detenidos, la situación es muy diferente. Muchos residen en comunidades alejadas de los tribunales de inmigración, lo que hace que la asistencia presencial sea costosa y logísticamente compleja. Para ellos, la posibilidad de comparecer de forma remota a través de Webex o plataformas similares puede mejorar significativamente el acceso a las audiencias y reducir las dificultades. La principal desventaja —una menor participación en el proceso legal y una menor probabilidad de contar con un abogado— puede verse compensada, desde la perspectiva del acusado, por la posibilidad práctica de comparecer.

Sin embargo, la evidencia empírica agregada sugiere que incluso los acusados no detenidos pueden enfrentar resultados desfavorables en las audiencias por videoconferencia. La decisión de optar por la modalidad remota debe tomarse teniendo en cuenta las investigaciones que demuestran que las comparecencias por video se correlacionan con menores tasas de solicitud de amparo, menores tasas de retención de abogados y, en última instancia, mayores tasas de expulsión, aunque los jueces no parecen dictar sentencias más severas en función del fondo del asunto para los participantes por video.

Cuestiones relativas a la elección de la ley aplicable y la jurisdicción en las audiencias por videoconferencia

La expansión de las audiencias por videoconferencia ha generado nuevas cuestiones relativas a la elección de la ley aplicable, ya que los jueces de inmigración y los demandados pueden encontrarse en distintos circuitos federales, lo que podría crear ambigüedad respecto a qué ley del circuito debe aplicarse al procedimiento. Este asunto ha suscitado gran interés entre la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) y los tribunales de circuito, con importantes implicaciones para los demandados en casos donde la jurisprudencia del circuito difiere sustancialmente en cuestiones legales determinantes.

La decisión fundamental de la BIA sobre este tema es [Matter of Garcia, 28 I&N Dec. 693 (BIA 2023)][14][43][46], que aclara que la ley del circuito aplicable en los procedimientos de los tribunales de inmigración es la ley que rige la ubicación geográfica del tribunal de inmigración donde reside la jurisdicción y comienzan los procedimientos, en contraposición a la ubicación física desde donde el juez de inmigración lleva a cabo la audiencia o la ubicación del tribunal de control administrativo.[14][43] La BIA rechazó los argumentos de que la ubicación física del juez de inmigración debería determinar la ley del circuito aplicable, razonando que este enfoque crearía incertidumbre e inestabilidad en el marco de la ley aplicable.[14][43]

Sin embargo, los circuitos mismos han adoptado enfoques variados respecto a la cuestión de la elección de la ley. El [Séptimo Circuito en Chavez-Vasquez v. Mukasey, 548 F.3d 1115, 1118 n.1 (7th Cir. 2008)][14], sostuvo que la jurisdicción se determina por la ubicación del tribunal de inmigración en lugar de la ubicación desde la que comparecen los testigos por teleconferencia.[14] El [Décimo Circuito en Medina-Rosales v. Holder, 778 F.3d 1140, 1143 (10th Cir. 2015)][14], sostuvo que la ubicación física del juez de inmigración y el hecho de que los procedimientos se llevaran a cabo por videoconferencia no cambian la ley del circuito aplicable.[14] El [Tercer Circuito en Luziga v. Att'y Gen.

(citado en *Matter of Garcia*)^[14], sostuvo que la jurisdicción era apropiada en su circuito donde el demandado compareció desde una instalación en Louisiana y el juez de inmigración compareció por videoconferencia desde un centro de adjudicación de inmigración en Virginia.^[14]

Para los profesionales del norte de California, el enfoque del Noveno Circuito es determinante. El Noveno Circuito no ha publicado una guía extensa que aborde específicamente la elección de la ley aplicable en los procedimientos de VTC, pero los principios generales de competencia territorial del Noveno Circuito y la decisión de la BIA en *Garcia* establecen que el lugar de la audiencia registrada (el tribunal de inmigración donde se presentó la Notificación de Comparecencia y se confiere la jurisdicción) determina la ley del circuito aplicable, independientemente de dónde el juez de inmigración celebre físicamente la audiencia.^{[14][43]}

Este asunto tiene una importancia estratégica directa. Los acusados arrestados y detenidos en el norte de California pueden tener sus casos registrados en el Tribunal de Inmigración de San Francisco (ley del Noveno Circuito), pero si un juez de inmigración lleva a cabo la audiencia de forma remota desde un centro de adjudicación de inmigración en otro circuito, el caso sigue rigiéndose por la ley del Noveno Circuito.^{[14][43]} Por el contrario, un acusado cuyo caso está registrado en un tribunal de inmigración del Quinto Circuito pero que comparece desde un centro de detención en el norte de California sigue sujeto a la ley del Quinto Circuito.^{[14][43]} Para los casos en los que la ley del circuito diverge significativamente en cuestiones críticas (ley de asilo, criterios de cancelación de la deportación, criterios de evaluación de credibilidad, etc.), esta distinción puede afectar materialmente resultados de los casos.

Los demandados y sus abogados deben considerar estratégicamente las mociones para cambiar de sede cuando parezca probable que la sede sea en un circuito menos favorable, particularmente al inicio de los procedimientos, cuando dichas mociones pueden ser más fácilmente concedidas. [Según 8 CFR § 1003.20(b)]^[51], los jueces de inmigración tienen discreción para conceder o denegar las mociones de cambio de sede con base en una causa justificada, y la moción requiere la demostración de circunstancias convincentes que justifiquen la transferencia a una jurisdicción diferente.^[51] Sin embargo, los abogados deben realizar un análisis y una defensa enérgicos de la sede cuando las diferencias en la ley del circuito puedan afectar los resultados sustantivos.

Determinación de la credibilidad, evaluación del comportamiento y equidad en las audiencias por videoconferencia.

Una de las preocupaciones más importantes en materia de debido proceso con respecto a las audiencias por videoconferencia se refiere a la evaluación que el juez de inmigración hace de la credibilidad del demandado, basada en su comportamiento y otros indicadores conductuales. Los jueces de inmigración están expresamente autorizados, conforme al artículo 1229a(c)(4)(B) del Título 8 del Código de los Estados Unidos (8 USC § 1229a(c)(4)(B)) ^[32], a basar las determinaciones de credibilidad en numerosos factores, incluyendo el comportamiento, la sinceridad, la capacidad de respuesta, la plausibilidad inherente del relato, la coherencia entre las declaraciones escritas y orales, la coherencia interna de las declaraciones, la coherencia con otras pruebas del expediente y cualquier inexactitud o falsedad en las declaraciones. ^[32] La ley también establece que no existe una presunción de credibilidad, pero si no se realiza explícitamente una determinación adversa de credibilidad, el demandado tendrá una presunción refutable de credibilidad en apelación. ^[32]

Sin embargo, investigaciones empíricas y estudios jurídicos recientes han planteado serias dudas sobre si las evaluaciones de credibilidad basadas en el comportamiento siguen siendo justas y fiables en contextos de audiencias por videoconferencia. Las expertas jurídicas Liz Bradley, de la Facultad de Derecho Carey de la Universidad de Pensilvania, e Hillary Farber, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Massachusetts, han publicado análisis detallados sobre cómo las videoconferencias distorsionan la evaluación de credibilidad basada en el comportamiento en los procedimientos de inmigración.^{[39][42]}

Bradley y Farber enfatizan que el comportamiento es fundamentalmente poco fiable como medida de credibilidad, incluso en procedimientos presenciales. La persona promedio puede discernir la verdad de la mentira basándose en indicadores conductuales con una precisión de solo el 54%, apenas superior al azar, y los jueces pueden no tener un desempeño sustancialmente mejor en casos específicos. ^[39] Las audiencias por video agravan esta falta de fiabilidad a través de múltiples mecanismos. En primer lugar, el lenguaje corporal, que según las investigaciones representa más de la mitad del significado y la comprensión del lenguaje, se vuelve difícil o imposible de percibir en video, incluso cuando los ángulos de la cámara intentan capturarlo.

Encuadre de cuerpo completo.[39] En segundo lugar, el ángulo de la cámara en sí afecta la credibilidad percibida, y los ángulos de cámara más altos se asocian con una menor credibilidad percibida en comparación con el nivel de los ojos o ángulos más bajos.[39]

En tercer lugar, los problemas técnicos durante las audiencias por video pueden crear lo que los investigadores denominan efectos de "fluidez cognitiva", donde los sentimientos negativos de los jueces sobre las dificultades para escuchar a un testigo o la mala calidad del audio pueden dirigirse erróneamente a sus evaluaciones de la calidad de la evidencia y la credibilidad del demandado.[39] En cuarto lugar, el desempeño del intérprete se deteriora en contextos de video, ya que los intérpretes no pueden percibir el lenguaje corporal con la misma facilidad a través del video y tienen dificultades para indicar a los oradores que hagan una pausa o reduzcan la velocidad de su discurso.[39] Cuando los intérpretes traducen simultáneamente por video con el juez también hablando, su traducción se proyecta al mismo volumen que el discurso del juez, lo que crea confusión en el oyente y degrada la claridad de la interpretación.[39]

Además, el trauma, presente en un número considerable de casos de inmigración, puede causar un afecto aplanado o déficits de memoria que los jueces pueden malinterpretar como deshonestidad.[39] Los síntomas relacionados con el trauma se vuelven aún más difíciles de distinguir de los problemas de credibilidad en contextos de video donde los jueces no pueden observar señales conductuales sutiles que podrían indicar respuestas al trauma en lugar de engaño deliberado.[39]

Bradley y Farber documentan un hallazgo empírico sorprendente: los jueces de inmigración tienen un 31% más de probabilidades de ordenar la deportación de los solicitantes en audiencias por video que en audiencias presenciales cuando se trata de determinar la credibilidad. [39][42] Esta disparidad persiste incluso entre jueces experimentados y parece estar relacionada con la distorsión sistemática de la evaluación del comportamiento en contextos de video, más que con el sesgo del juez o factores específicos del caso.[39]

Los tribunales han reconocido estas preocupaciones en algunos contextos. En [Matter of RCR-, 28 I&N Dec. 74 (BIA 2020)][56], la BIA reconoció que una audiencia por videoconferencia sobre una solicitud de asilo puede ser injusta si el juzgador tiene dificultades para evaluar el comportamiento para determinar la credibilidad, si el abogado no puede consultar en privado con el demandado y asesorarlo, o si existen problemas tecnológicos insuperables con la calidad del sonido o del video.[56] La BIA señaló que la equidad en los procedimientos por video debe evaluarse caso por caso, dependiendo del grado de interferencia con la presentación completa y justa del caso del demandado y del grado de perjuicio sufrido por este.[56]

Sin embargo, los tribunales de apelación enfrentan barreras sustanciales para revisar las determinaciones de credibilidad hechas en audiencias por video. Los problemas técnicos generalmente no se escriben en los registros de audiencia a menos que se anuncien expresamente durante los procedimientos, lo que impide que los tribunales de apelación revisen lo que ocurrió y evalúen si la modalidad de video afectó la evaluación.[39] El marco legal vigente otorga una deferencia extraordinaria a las evaluaciones de credibilidad de los jueces de inmigración, revertiendo tales determinaciones en menos del cinco por ciento de los casos, bajo la teoría de que los jueces de primera instancia en procedimientos presenciales poseen una ventaja única para evaluar la credibilidad cara a cara.[39] Esta deferencia extraordinaria se vuelve claramente problemática cuando el contacto "cara a cara" ha sido mediado a través de tecnología de video que la investigación demuestra que distorsiona sistemáticamente la percepción del comportamiento.

Bradley y Farber recomiendan prohibir las conclusiones adversas sobre la credibilidad basadas en el comportamiento para las audiencias realizadas por video, ya que los supuestos que subyacen a la deferencia a las evaluaciones del comportamiento son incongruentes con las realidades de las audiencias virtuales.[39][42] A falta de una prohibición formal, recomiendan que los demandados soliciten consentimiento antes de celebrar audiencias por video y que las grabaciones de las audiencias por video estén disponibles para la revisión del tribunal de apelación, de modo que los tribunales de apelación puedan reevaluar las determinaciones de credibilidad en lugar de aceptar la evaluación del juez de inmigración sin una revisión independiente.[39][42]

Realidades de la práctica en los tribunales de inmigración del norte de California

Los procedimientos judiciales de inmigración en el norte de California se llevan a cabo dentro del marco de tres sedes de la EOIR que prestan servicio en la región: la principal [Tribunal de Inmigración de San Francisco en 100 Montgomery Street, Suite 800, San Francisco, CA 94104][31], una instalación secundaria en [630 Sansome Street, 4.º piso, Sala 475, San Francisco, CA 94111][31] y la [Sede de Audiencias de Concord en 1855 Gateway Blvd., Suite 850, Concord, CA 94520][31]. Estos tribunales se encuentran dentro de la jurisdicción geográfica del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, lo que hace que [el precedente del Noveno Circuito sea vinculante en todas las cuestiones legales] [17].

El Tribunal de Inmigración de San Francisco tramita un volumen considerable de casos procedentes de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua), México y clientes mexicanoamericanos, así como un número significativo de personas detenidas en centros de detención del ICE en todo el norte de California y la región en general.

El tribunal también tramita un número considerable de casos de visas H-1B y casos de DACA/Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que refleja la presencia de la industria tecnológica en la región y las comunidades de inmigrantes establecidas.

Se sabe que las prácticas de los jueces federales en el tribunal de San Francisco varían considerablemente en lo que respecta a la celebración de audiencias por videoconferencia. Algunos jueces de inmigración han demostrado mayor flexibilidad al conceder solicitudes de audiencias presenciales o remotas, mientras que otros aplican criterios discrecionales más estrictos y priorizan la eficiencia operativa sobre las preferencias del demandado. Bajo el marco actual de la PM 25-25, que elimina la presunción a favor de las solicitudes del demandado, los profesionales deben prever una mayor variación en las prácticas de los jueces y procurar comprender las tendencias individuales de cada juez con respecto a las audiencias por videoconferencia antes de presentar solicitudes en casos específicos.

La Oficina de Asilo de San Francisco realiza entrevistas para determinar si existe temor fundado o razonable a los solicitantes de asilo en la región. Los tiempos de espera para las entrevistas varían considerablemente según la cantidad de casos pendientes y la disponibilidad de personal, pero, por lo general, los solicitantes pueden esperar varios meses de demora entre su llegada a la frontera y la realización de la entrevista. Los funcionarios de asilo de la oficina de San Francisco han desarrollado patrones y tendencias particulares en cuanto a las preguntas, la estructura de la entrevista y la evaluación de la credibilidad, que los profesionales con experiencia pueden aprovechar para preparar a los solicitantes para las entrevistas.

El singular panorama migratorio del norte de California también refleja consideraciones particulares respecto a la ley penal estatal de California y sus consecuencias migratorias. El [Código Penal de California § 1473.7][51], promulgado en 2015, establece un mecanismo para anular condenas penales cuando el abogado defensor no informó sobre las consecuencias migratorias o cuando el asesoramiento fue erróneo o engañoso. El [Código Penal § 1203.43][51], enmendado en 2019, permite a los jueces desestimar casos penales una vez cumplidas las condiciones de la libertad condicional, con la intención específica de brindar alivio a las personas cuyos antecedentes penales generan consecuencias migratorias. El [Código Penal § 18.5][51], que implementa las reducciones de sentencia de la Proposición 47, se ha utilizado estratégicamente para reducir la severidad de las condenas y, por lo tanto, mitigar las consecuencias migratorias. El [Proyecto de Ley 1352 de la Asamblea][51], promulgado en 2018, exige a los fiscales que divulguen material de descubrimiento penal con suficiente antelación para permitir la evaluación de las consecuencias migratorias.

Además, la protección que ofrece la ley estatal de California, en virtud de la SB 54 (Ley de Valores de California) [51], limita la cooperación de las fuerzas del orden locales con las autoridades federales de inmigración en diversos contextos, brindando ciertas garantías procesales a las personas bajo custodia estatal. Estas garantías estatales crean oportunidades estratégicas para que los demandados en los procedimientos del norte de California aborden los antecedentes penales que, de otro modo, podrían fundamentar las conclusiones de deportación o la denegación discrecional de la solicitud de alivio.

Novedades legislativas recientes y reforma procesal pendiente.

A partir de febrero de 2026, el Congreso presta una atención considerable a los procedimientos de los tribunales de inmigración y a las garantías procesales para los demandados. Legislación pendiente, incluyendo la Ley de Debido Proceso de los Tribunales de Inmigración

La Ley de Protección de 2025 ([HR 6521][22][25][28]) aborda específicamente las preocupaciones sobre el debido proceso en las audiencias por video y busca codificar las protecciones legales con respecto a la elección del demandado en la modalidad de audiencia.

El panorama legislativo refleja el reconocimiento, por parte de grupos bipartidistas del Congreso, de que las políticas actuales sobre audiencias por videoconferencia pueden perjudicar sistemáticamente a los demandados y que podría ser necesaria una clarificación legal de sus derechos. Si bien a la fecha de este informe aún no se ha promulgado ninguna ley al respecto, la presentación y la continua promoción de estas medidas indican que el marco actual de la PM 25-25, que permite una discreción judicial ilimitada en cuanto a la modalidad de la audiencia, podría verse limitado por la legislación.

Los profesionales deben seguir de cerca la evolución legislativa, ya que la aprobación de cualquier medida que otorgue derechos legales explícitos para solicitar audiencias presenciales o remotas modificaría directamente el marco discrecional actual. Dicha legislación probablemente requeriría que la EOIR revisara las directrices para los jueces de inmigración, lo que podría implicar la reinstauración o modificación de las presunciones vigentes en virtud de la DM 22-07.

Toma de decisiones estratégicas: evaluación de las opciones de modalidad

Para determinar si se deben solicitar audiencias por videoconferencia o presenciales, es necesario un análisis cuidadoso de las circunstancias del cliente, la complejidad del caso, las pruebas disponibles, los factores de credibilidad, los recursos del abogado y las consideraciones específicas del juez. El cálculo estratégico difiere sustancialmente entre los encuestados detenidos y los no detenidos.

Para los acusados detenidos

Para los acusados detenidos en centros de detención migratoria, el marco actual presenta dilemas complejos. La comparecencia por videoconferencia desde el centro de detención suele ser la opción predeterminada, sin necesidad de solicitud ni preparación previa. Sin embargo, la evidencia empírica que demuestra un aumento del 90 % en la probabilidad de solicitar una medida cautelar y un aumento del 35 % en la probabilidad de obtener asistencia letrada en procedimientos presenciales debería orientar la estrategia. Si los centros de detención se encuentran lejos del tribunal de inmigración (lo cual es común en casos donde los acusados están detenidos en centros rurales mientras sus casos se tramitan en tribunales de inmigración urbanos), los costos y la logística del traslado de un acusado detenido al tribunal para procedimientos presenciales pueden resultar prohibitivos, lo que convierte la comparecencia por videoconferencia en la opción predeterminada, independientemente de la preferencia.

Para los detenidos con casos complejos que requieren la presentación de pruebas sustanciales, se recomienda encarecidamente la celebración de audiencias presenciales, siempre que la logística lo permita. Esto se debe a que la posibilidad de presentar documentos, realizar un interrogatorio adecuado, que el abogado y el detenido puedan conversar en privado y que los jueces observen su comportamiento sin mediación tecnológica garantiza un proceso más justo. Para los detenidos con casos sencillos o aquellos que enfrentan una alta probabilidad de deportación en ausencia de circunstancias atenuantes sustanciales, la mayor interacción que podría generar la presencia presencial podría influir significativamente en los resultados.

Para los encuestados no detenidos

Para los acusados no detenidos, las consideraciones estratégicas difieren. Si el acusado reside a una distancia razonable del tribunal de inmigración (menos de una o dos horas en coche), generalmente se debe considerar seriamente la posibilidad de comparecer en persona, salvo que existan circunstancias excepcionales que lo dificulten. La evidencia empírica de mejores resultados para quienes comparecen en persona, junto con la menor participación documentada en las audiencias por videoconferencia, sugiere que la presencia en el tribunal tiene un valor estratégico significativo, incluso si implica un esfuerzo y un costo para el acusado.

Para los encuestados no detenidos que residen a distancias considerables del tribunal de inmigración, los procedimientos por video pueden proporcionar el acceso necesario, particularmente si el encuestado tiene obligaciones laborales o familiares que hacen imposible viajar al tribunal. En tales casos, los encuestados deben tener en cuenta la investigación que demuestra una reducción

La participación en los procedimientos por videoconferencia debe compensarse garantizando una preparación previa exhaustiva, una participación activa en la planificación de la audiencia y una comunicación explícita con el abogado sobre la estrategia del litigio y la presentación de pruebas.

Consideraciones específicas del juez

Los profesionales del derecho en el norte de California deben recopilar información detallada sobre las preferencias y prácticas de cada juez con respecto a las audiencias por videoconferencia. Es importante identificar a los jueces de inmigración que hayan emitido órdenes permanentes o procedimientos operativos locales relacionados con las comparecencias por video. Los jueces que priorizan la eficiencia operativa y la reducción de los costos de viaje podrían conceder con mayor facilidad las solicitudes de comparecencia por videoconferencia, mientras que aquellos que enfatizan el debido proceso y la imparcialidad podrían ser más escépticos ante los requisitos obligatorios de video o más receptivos a las solicitudes de audiencias presenciales.

Consideraciones prácticas para la implementación: Desde la presentación de la moción hasta la audiencia. Participación

Los procesos prácticos para la realización de audiencias por videoconferencia o presenciales van más allá de la aprobación de las mociones e incluyen la coordinación continua con el personal del tribunal, los requisitos tecnológicos, la preparación de las pruebas y la logística de la participación en la audiencia.

Requisitos de tecnología y plataforma

EOIR ha designado a Webex de Cisco como su plataforma externa de videoconferencias para audiencias remotas.^{[2][34][38][53]} Los demandados y los abogados que comparecen de forma remota a través de Webex necesitan acceso a una computadora o dispositivo móvil con conexión a Internet y capacidad de audio (normalmente se requiere una cámara para el video, pero se puede complementar con solo audio en ciertas circunstancias).^{[34][53]} Los tribunales mantienen Puntos de Contacto (POC) designados en cada tribunal para brindar soporte a las audiencias basadas en Internet y abordar problemas técnicos en tiempo real.^{[34][53]} La información de contacto para estos POC generalmente está disponible en la página web de cada tribunal, y los profesionales deben establecer contacto con los POC pertinentes antes de las audiencias para abordar preguntas tecnológicas y garantizar una participación fluida.

Los participantes en la audiencia deben probar la tecnología y la conectividad con suficiente antelación a las sesiones programadas, asegurándose de que los micrófonos funcionen correctamente, que la transmisión de video sea estable y que se haya solucionado cualquier problema de compatibilidad de software o navegador. El ICPM especifica que los jueces de inmigración deben confirmar que todas las personas que comparecen de forma remota sean claramente visibles en pantalla y que todos los participantes puedan escuchar todo lo que se dice.^{[34][53]} Si surgen problemas de conectividad antes o durante las audiencias, los jueces de inmigración deben esperar un tiempo razonable para permitir la reconexión, pero solo podrán proceder después de determinar con el punto de contacto del tribunal que la reconexión no es posible.^{[34][53]}

Preparación y presentación de pruebas

Los procedimientos remotos requieren la presentación y preparación de pruebas con antelación, a diferencia de los procedimientos presenciales. Para las audiencias que involucran múltiples documentos, registros certificados o pruebas físicas, los profesionales deben coordinar la presentación con antelación con el tribunal para garantizar que los jueces y la parte contraria puedan acceder a las pruebas antes de la audiencia. El ICPM señala que los jueces de inmigración suelen permitir el envío de documentos por fax entre las partes durante las audiencias por videoconferencia, pero esta opción requiere una coordinación previa clara y presupone que los documentos están disponibles en lugares equipados con fax.^{[1][35]}

Para los demandados que comparezcan de forma remota desde centros de detención u otros lugares, el abogado debe asegurarse de que los demandados tengan acceso a copias de documentos importantes durante la audiencia. Los centros de detención pueden restringir el acceso a los documentos.

El acceso a los documentos o la limitación de la capacidad de los encuestados para conservar los materiales requiere una coordinación previa con el personal del centro para garantizar que los encuestados puedan revisar los materiales y consultarlos durante su testimonio.

Comunicación abogado-cliente y consulta privada

Un requisito procesal fundamental para las audiencias por video es garantizar una comunicación privada adecuada entre abogado y cliente durante los procedimientos. Para los demandados representados, el abogado debe poder conversar en privado con el demandado durante los recesos y en otros momentos en que la consulta sea necesaria para una representación eficaz.[56] Para las audiencias por video, esto puede requerir que el demandado y su abogado comparezcan juntos desde el despacho del abogado u otro lugar donde la comunicación privada sea factible, o puede requerir que el tribunal proporcione tecnología de video que permita canales privados entre abogado y cliente separados de la transmisión principal de la audiencia.[34][53]

La DM 22-07 permitió explícitamente que los demandados y sus abogados comparecieran juntos o desde lugares diferentes, indicando que no es necesario que comparezcan juntos desde el despacho del abogado.[34][53] Sin embargo, si comparecen desde lugares separados, la coordinación de la comunicación privada se vuelve más compleja y puede requerir acuerdos previos con el personal del tribunal. Los abogados deben abordar explícitamente la logística de la comunicación abogado-cliente antes de presentar mociones o confirmar la participación en la audiencia remota, asegurándose de que se cumplan los requisitos de confidencialidad de la comunicación.

Coordinación y presentación de testigos

En los procedimientos que implican el testimonio de testigos, la tecnología de video plantea nuevos desafíos de coordinación. Los abogados deben determinar con anticipación si los testigos comparecerán de forma remota por video, si comparecerán en persona ante el tribunal de inmigración o si comparecerán en persona en lugares alternativos con conexión de video al tribunal. El ICPM establece que los jueces de inmigración deben atender las solicitudes de comparecencia remota de los testigos cuando dichas solicitudes sean razonables.[34][53]

Para las comparecencias remotas de testigos, los abogados deben coordinar con antelación los detalles del testimonio, incluyendo los requisitos tecnológicos, la programación y la preparación sustantiva. Si los testigos no hablan inglés, puede ser necesario contar con intérpretes, y la interpretación por video plantea desafíos adicionales de coordinación. Los intérpretes que comparecen de forma remota pueden tener dificultades para gestionar la doble exigencia de escuchar simultáneamente al testigo y al juez, lo que puede dar lugar a interpretaciones erróneas o a la omisión de información.

Problemas de conectividad, reprogramación y soluciones

Cuando los participantes en audiencias por internet experimentan problemas de conectividad, el juez de inmigración debe determinar si procede y en qué modalidad. Si solo se pierde la conexión de video, pero se mantiene la de audio, el juez de inmigración puede proceder con una audiencia solo por audio, pero solo si las partes dan su consentimiento.[34][53] Los jueces de inmigración deben tener presente que la comunicación efectiva con los participantes en la audiencia es primordial; por lo tanto, las audiencias deben reprogramarse cuando la comunicación efectiva no sea posible debido a problemas de conectividad.[34][53]

Para los encuestados que experimentan problemas de conectividad sistémica (por ejemplo, internet doméstico inadecuado, limitaciones tecnológicas en el centro de detención), los jueces de inmigración pueden ordenar que las partes comparezcan en persona en una audiencia reprogramada.[34][53] Es importante que los problemas técnicos y la forma en que los jueces de inmigración los abordaron se documenten claramente en los registros de la audiencia, ya que dicha documentación se vuelve fundamental si se lleva a cabo una revisión de apelación del procedimiento y surgen reclamos de que los problemas técnicos impidieron una adjudicación justa.

Conclusión: Síntesis del marco y los imperativos estratégicos

El marco legal que rige las comparecencias por video en los procedimientos judiciales de inmigración refleja la autorización estatutaria, la discreción administrativa, las limitaciones del debido proceso y una política en evolución que recientemente ha cambiado sustancialmente hacia la discreción judicial sin presunciones que favorezcan las preferencias del demandado. Los jueces de inmigración poseen amplia autoridad bajo [8 USC § 1229a(b)(2)][32] y [8 CFR § 1003.25(c)][21][37] para realizar audiencias por videoconferencia o conferencia telefónica, con excepciones limitadas aplicables a las audiencias telefónicas sobre el fondo del asunto (que requieren el consentimiento del demandado) y las determinaciones de temor creíble (que pueden realizarse telefónicamente sin consentimiento).[1][32][37]

La base probatoria con respecto a los resultados de las audiencias por video es sustancial y consistente: los acusados detenidos que comparecen virtualmente tienen una probabilidad significativamente mayor de ser deportados que los acusados en situaciones similares que comparecen en persona, principalmente debido a una menor participación en el proceso legal (menores tasas de retención de abogados, menores tasas de solicitud de alivio) en lugar de debido a una toma de decisiones judiciales más severa en cuanto al fondo.[8][27][30] Esta disparidad de resultados, combinada con investigaciones que documentan una distorsión sistemática de la evaluación de la credibilidad en contextos de video y barreras documentadas para una comunicación efectiva entre abogado y cliente en procedimientos remotos, crea importantes preocupaciones sobre el debido proceso que siguen sin resolverse en la política actual.

El marco normativo actual, tras la derogación de la DM 22-07 por parte de la EOIR PM 25-25 en marzo de 2025, ha eliminado las presunciones que antes favorecían la conciliación de las solicitudes de comparecencia presencial o remota de los demandados. Los jueces de inmigración ahora tienen discreción para determinar la modalidad de la audiencia en función de las necesidades operativas y las preferencias individuales, sujetas únicamente a los requisitos de consentimiento establecidos por ley. Este marco genera variabilidad en la práctica, dependiendo de la asignación del juez, la filosofía individual del juez con respecto a la eficiencia operativa frente al debido proceso y las prácticas de los tribunales de inmigración locales.

Para los profesionales del norte de California, este análisis plantea varias cuestiones fundamentales. En primer lugar, es esencial comprender en detalle las prácticas y preferencias de cada juez con respecto a las audiencias por videoconferencia para desarrollar una estrategia eficaz. Una investigación temprana de las tendencias de los jueces en relación con las mociones presentadas en audiencias por videoconferencia debería orientar la planificación de los casos y las decisiones sobre la presentación de mociones.

En segundo lugar, para los detenidos con casos complejos o pruebas atenuantes sustanciales, se debe considerar seriamente la posibilidad de celebrar audiencias presenciales seguras, a pesar de las dificultades logísticas, ya que la evidencia empírica que documenta mejores resultados en este tipo de audiencias es considerable. Las solicitudes deben exponer no solo la inconveniencia, sino también la complejidad sustancial del caso, problemas de credibilidad que requieran observación del comportamiento u otros factores que demuestren por qué la modalidad de videoconferencia perjudicaría una adjudicación justa.

En tercer lugar, para todos los encuestados, la evidencia empírica sobre la evaluación de la credibilidad en los procedimientos por videoconferencia debería guiar su estrategia procesal. Si es probable que se cuestione la credibilidad y si se propone o se programa la modalidad por videoconferencia, los encuestados deberían considerar seriamente si está justificado solicitar procedimientos presenciales.

Alternativamente, si las grabaciones de video son necesarias o inevitables, los acusados deben prepararse explícitamente para la realidad de que la modalidad de video puede perjudicar sistemáticamente la percepción de su credibilidad y deben compensarlo asegurándose de que la evidencia documental que la corrobora sea sólida y que el testimonio sea lo más convincente y específico posible.

En cuarto lugar, la estrategia de apelación debe incluir documentación detallada de los problemas técnicos, las barreras de comunicación u otros factores que afectaron las grabaciones de video, ya que dicha documentación resulta fundamental para cualquier impugnación posterior de las determinaciones de credibilidad o la imparcialidad de la audiencia. La actual deferencia de las apelaciones a las evaluaciones de credibilidad ya es problemática; las distorsiones adicionales que genera la modalidad de video solo aumentan la importancia de un registro exhaustivo.

Finalmente, los profesionales deben monitorear la trayectoria de la legislación federal pendiente con respecto a las audiencias por video y

Garantías procesales. La presentación de proyectos de ley como el HR 6521 indica que los marcos discrecionales actuales podrían enfrentar desafíos legislativos, lo que podría generar derechos legales que los demandados podrían invocar en relación con la elección de la modalidad de audiencia. El conocimiento temprano de estos avances permite a los profesionales asesorar a sus clientes sobre posibles derechos futuros y preparar sus argumentos en los procedimientos actuales de manera que resistan cualquier modificación legislativa del marco normativo.

El panorama legal y práctico que rige las comparecencias por videoconferencia en los tribunales de inmigración sigue siendo dinámico, con una considerable incertidumbre sobre si la discrecionalidad judicial actual se mantendrá o si los avances legislativos o reglamentarios impondrán, en última instancia, restricciones que favorezcan la elección del demandado o que exijan garantías procesales. Hasta que se materialicen dichos avances, los profesionales del norte de California deben trabajar dentro del marco discrecional actual, teniendo en cuenta la abundante evidencia empírica que demuestra que la modalidad por videoconferencia perjudica sistemáticamente a los demandados, y desarrollando estrategias sofisticadas para garantizar la celebración de audiencias presenciales cuando sea apropiado o para compensar las desventajas de la videoconferencia mediante una mejor preparación y documentación cuando las audiencias remotas sean inevitables.

Generado por: Asistente Legal de IA | Facilitado por: Bufete de Abogados de Fernando Hidalgo, Inc. | 2 de febrero de 2026